

NUESTRA AMÉRICA XXI

DESAFÍOS Y ALTERNATIVAS

GRUPO DE TRABAJO CLACSO
CRISIS Y ECONOMÍA MUNDIAL



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

#56

Junio 2021

**SEC-
CIO-
NES:**

2 - 4
Crisis y Economía Mundial

5-7 Países y Regiones

8-10
Temas

11
Gráficas y Estadísticas

CRISIS, PANDEMIA, VACUNAS ...

JOSEFINA MORALES* Y GABRIELA ROFFINELLI**

La pandemia del COVID-19, como se ha señalado, nos arrastró a una crisis económica no vista desde los años treinta, sin adjetivos para caracterizarla, con tasas de contracción económica en 2020 del orden del ocho por ciento en Nuestra América, superiores al cinco por ciento en Europa y en Estados Unidos de 3.5%. Aunque, en rigor, la crisis económica mundial estaba latente cuando irrumpió la pandemia; dato que soslayan los confiados anuncios acerca de una pronta salida de la crisis una vez finalizada la pandemia o incluso la posibilidad de un nuevo “reinicio” o “reseteo” capitalista (Klauss, Schwaba, 2021, Foro Económico Mundial).

En varios países la crisis va más allá de la pandemia, no sólo porque se arrastraban varios años de precario crecimiento e incluso de recesión; la dimensión social de la crisis exhibió una polarización social insostenible, la imposibilidad de que la mayor parte de la población soportara nuevas medidas que so pretexto de enfrentar la crisis hicieran recaer sobre sus hombros el costo de la crisis. Y la dimensión política de la crisis tomó un primer plano, mostrando que la eco-

nomía es una relación social.

Las políticas de ajuste neoliberales, como se ha exhibido, denunciado, demostrado, destruyeron las instituciones de salud pública previamente alcanzadas, y no suficientes, en sus afanes privatizadores para instalar la mercantilización

la baja recaudación fiscal.

América Latina ha registrado el mayor doloroso impacto de la pandemia al registrar, hacia mediados de mayo, cerca de un millón de defunciones (982 635). En Brasil se presentó 44.4% de ellas, en México 22.4 y en Colombia y

América Latina ha registrado el mayor doloroso impacto de la pandemia al registrar, hacia mediados de mayo, cerca de un millón de defunciones (982 635). En Brasil se presentó 44.4% de ellas, en México 22.4 y en Colombia y Argentina el 15.5 por ciento.

de los servicios de salud. Los bajos y desiguales recursos destinados al sector representaban, en 2018 y en algunos de nuestros países, entre 5 y 9% del PIB, al tiempo que Estados Unidos destinaba 16.9 por ciento de su economía. El pago de la deuda, de los intereses, consumía, desde los años ochenta, una importante proporción los recursos públicos, de por sí insuficientes ante

Argentina el 15.5 por ciento.

Frente a la crisis de la pandemia cinco medidas destacaron en la política económica: apoyos financieros al gran capital, apoyos financieros a la pequeña y microempresa, apoyos temporales a trabajadores desempleados, compensaciones extraordinarias a la población y recursos extraordinarios para el sector salud para la compra de

implementos médicos y para la compra de vacunas.

En la mayoría de los casos, una política económica que se realizó con mayor endeudamiento en la crisis, exenciones fiscales en algunos casos y, en otros, con incremento de impuestos como fue la propuesta en mayo del gobierno genocida de Iván Duque en Colombia.

Vacunas, patentes y la criminal mercantilización de la salud

Frente a la pandemia se mostró la capacidad adquirida por el conocimiento colectivo, por la ciencia realizada, en gran medida, con recursos

públicos. En menos de un año se obtuvo la vacuna contra el COVID-19 en las grandes transnacionales farmacéuticas que obtienen, como la mayoría de los monopolios, importantes ganancias por la renta tecnológica que se expresa en la propiedad privada de las patentes. En el caso de AstraZeneca, por ejemplo, la industria farmacéutica apenas si cubrió el 3% del costo de la investigación (Pascual Serrano, *Sputnik*, 24 de abril, 2021).

Apropiación privada que ha sido cuestionada y rechazada de tiempo atrás. Hay que tener presente que los científicos que descubrieron la vacuna contra la polio en los años cincuenta rechazaron su patente privada. En un programa de televisión, hace 50 años, se le preguntó a Jonas Salk, por qué rechazó patentar la vacuna

Solo un retorno a un crecimiento económico fuerte y sostenido puede evitar una crisis cualitativamente más profunda que cualquier otra experimentada en la historia, y no hay absolutamente ninguna razón para esperar que este crecimiento se materialice.

y contestó: “No hay patente. ¿Acaso se puede patentar el sol?”. Como dice el grupo puertorriqueño *Calle 13*: “Tú no puedes comprar el viento. Tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia. Tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores.”

Las transnacionales farmacéuticas, ahora, en la fase de los monopolios financiarizados, forman parte del gran conglomerado financiero especulativo denominado BlackRock que está presente, como dios padre, con participación en cuanta actividad y empresa se nos ocurra: en numerosas empresas de las bolsas de valores del mundo, en los más importantes bancos internacionales, en las empresas del sector inmobiliario, en los recursos de los grupos financieros de las pensiones, en las deudas públicas, como el caso de la deuda argentina y del gran endeudamiento en México generado en la privatización de las empresas públicas, en particular de la banca, denominado Fobaproa (véase cuadro 1).

Pascual Serrano, periodista e investigador, señaló también en *Sputnik*, el 24 de abril pasado que son dueños de las vacunas “The Vanguard Group y BlackRock. Estos dos fondos de inversión administran 16 billones de dólares. Si fueran un bloque de naciones, serían la tercera potencia mundial, solo por debajo de Estados Unidos y China, de acuerdo con datos del Banco Mundial en 2019.” Y Vanguard, principal accionista de BlackRock, también tienen importante presencia en instituciones públicas y bancos centrales, a través de la contratación

CUADRO 1

Transnacionales en grupos financieros	
Empresas	BlackRock
% de acciones	
Apple	6.3
Alphabet	6.3
Microsoft	6.6
Amazon	5.0
Facebook	6.4
Berkshire	7.8
Johnson & Johnson	6.9
JP Morgan	6.6
Wells Fargo	6.5
SANOFI	5.9
Pfizer	7.7
AztraZeneca	4.2

de sus ejecutivos, de esa práctica denominada de puertas giratorias en donde los tecnócratas de un puesto público a uno privado y viceversa, como Adewale Ayeremo, actual subsecretario del Tesoro, quien es asesor político de BlackRock.

Por la liberalización de las patentes

Frente a la pandemia, el descubrimiento de las vacunas y su acaparamiento por parte de los gobiernos imperialistas, la demanda social mundial es la liberalización de las patentes, la demanda de que sea un bien público. El 15 de mayo se publicó el Manifiesto Liberación de patentes y vacunas COVID 19 de más de 200 organizaciones sociales, que afirma que “La producción, distribución y administración de vacunas está atada a la competición entre laboratorios y países. Las patentes, el secretismo de los contratos y la falta de transparencia son sus causas.”

La reacción de los grandes capitales no se hizo esperar y decenas de agentes a su servicio realizan lobby en el capitolio para impedir la liberalización de las patentes.

Irónicamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se manifestó por la suspensión de las patentes, mientras mantuvo por meses mediante la ley de 1950, bloqueo a la exportación de insumos para producir vacunas y jeringas; motivo por el cual millones de dosis de las vacunas desarrolladas conjuntamente por la Universidad de Oxford y el laboratorio anglosueco AstraZeneca, con participación de la Argentina y México, cuando aún no habían llegado a los dos países latinoamericanos (<https://eldiarioar.com>, falta fecha).

La liberalización de las patentes y distribución de vacunas es urgente ante la enorme desigualdad de la aplicación de las vacunas, ante el desamparo de la mayor parte de los pobres del mundo, de los condenados de la tierra, como diría Fanon.

* México, GT *Crisis y economía mundial*, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y presidenta de SEPLA.

** Argentina, GT *Crisis y economía mundial*, co-coordinadora del GT.

MACONDO DESDE ADENTRO, COLOMBIA DESDE AFUERA

JOSÉ FRANCISCO PUELLO*

Radiografía preliminar de las protestas en 2021

Desde los primeros días de mayo, se desarrolla un Paro nacional indefinido y se registra una masiva movilización social en Colombia.

Por sus características, las actuales protestas serían una continuidad -interrumpida sólo por la coyuntura viral hoy vigente- que reeditan anteriores jornadas realizadas, primero en el año 2020, en plena pandemia, a raíz del asesinato por parte de la Policía en Bogotá de un joven, en medio de un arresto ilegal que desató un estallido social en Bogotá; y en 2019, en tiempos de pre-pandemia, desencadenadas por el movimiento estudiantil a raíz del incumplimiento de los acuerdos firmados con los y las universitarias un año antes por el Gobierno de Iván Duque sobre mejoras en la calidad y financiamiento de la educación superior, pero que, sin embargo y en adelante, sirvieron como una plataforma para ampliar en intensidad y en apoyos los episodios contenciosos sumando diferentes sectores sociales, complementando un arco mucho más comprensivo en las reivindicaciones.

Como resulta ser la regularidad histórica en Colombia, la respuesta estatal ante los reclamos ha sido exclusivamente la represión brutal contra los y las manifestantes que han salido pacíficamente a las calles y, para denominarlo sin eufemismos: terrorismo de Estado. Vale la pena subrayar que en este contexto, además de los aparatos policiales y militares se han registrado situaciones de terrorismo parainstitucionales, especialmente, de orden parapolicial (civiles

armados). Si bien estas demostraciones no extrañan porque son parte de las dinámicas paramilitares históricas del régimen anocrático en Colombia, especialmente en lo rural, la novedad es la exposición pública relativamente abierta que estas facetas despliegan en las ciudades; una situación que también vale señalar, ha sido posible evidenciar a través de la difusión masiva de imágenes (fotos, videos, etc.) desde las redes sociales, porque generalmente han sido omitidas y, en el mejor de los casos, deformadas por el oligopolio de medios de (des)información colombianos.

Por sus características, las actuales protestas serían una continuidad -interrumpida sólo por la coyuntura viral hoy vigente- que reeditan anteriores jornadas realizadas, primero en el año 2020

Desde el 28 de abril y hasta el 27 de mayo, según la Plataforma GRITA: *Grabando la violencia policial, Registrándola, Investigándola, Triangulando información de las denuncias y Asistiendo a las víctimas*, desde la ONG www.temblores.org, el resumen infausto de la brutalidad estatal muestra:

- 1133 víctimas de violencia física;
- 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza pública;
- 1445 detenciones arbitrarias en contra ma-

nifestantes;

648 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas;

47 víctimas de agresiones oculares;

175 disparos con armas;

22 víctimas de violencia sexual;

6 víctimas de violencia basada en género.

Adicionalmente, a partir de distintas fuentes y sus variaciones validadas, la cifra de Personas Desaparecidas durante las jornadas se calcula en aproximadamente trescientas.

La escala de las manifestaciones, en todo caso, debe ser subrayada por lo inédita. Primero, gracias a su particular intensidad, pero también -en segundo lugar- en vista de su singular resistencia ante los niveles inauditos de la represión policial y del Ejército quien por orden presidencial bajo la figura de la "Asistencia militar" también se encuentra en las calles (incluso,

naturaleza socioeconómica.

La administración Duque ya había adelantado antes dos contrarreformas tributarias que no sólo habían castigado el bolsillo de los ciudadanos de a pie, sino también a las finanzas estatales (al otorgar exenciones al Gran capital, especialmente, transnacional y paralelamente, provocar un sobre-endeudamiento externo que permitió un salvataje al capital financiero). Pretendió -en su momento- "balancear" sus decisiones anteriores cargando con más y mayores impuestos a la mayoría de la población, en un país donde en este año, los niveles de pobreza registran oficialmente rangos del orden del 43% y de indigencia del 15%, tasas de desempleo del 20%; lo anterior sin sumar que históricamente es un país con niveles espectaculares de desigualdad social en general y económica en particular, informalidad, derechos sociales ningunos

La escala de las manifestaciones, en todo caso, debe ser subrayada por lo inédita. Primero, gracias a su particular intensidad, pero también -en segundo lugar- en vista de su singular resistencia ante los niveles inauditos de la represión policial y del Ejército

como sucedió en varias ciudades, reprimiendo desde helicópteros artillados). A esto se le sumarian, además, la participación irregular de agentes presuntamente parapoliciales y paramilitares (como se ha podido registrar en el caso de ataques desde grupos de "civiles" contra la Minga indígena en el Valle del Cauca durante el fin de semana anterior, *modus operandi* que viene siendo replicado en otras ciudades).

Si bien la "causa" original de las movilizaciones fue vinculada con la pretensión gubernamental de imponer una Contrarreforma tributaria y fiscal que, en medio de la precariedad social generalizada y creciente fruto de la pandemia (registros oficiales hablan cómo sectores pobres y empobrecidos de la población han reducido, incluso, el número de comidas diarias de 3 a 2; algunos a 1 por día) y el desmanejo del Gobierno (se evidencia que Colombia es de los peores países en la gestión frente al choque viral a nivel mundial), las razones no deben reducirse simplemente a las demandas inminentes de

y una larga lista de etcéteras donde las violaciones sistemáticas a los derechos humanos han sido la impronta infame.

Lo que vienen mostrando y demostrando las movilizaciones, como contracara de las gravosas situaciones objetivas del régimen autoritario estatal y del sistema excluyente sociopolítico en Colombia, más allá que demandas inmediatas, son reivindicaciones históricas. Los llamados estallidos entonces sugieren ser menos simples resistencias que la expresión de un proyecto político hacia el mediano y largo plazos. Dentro de los desagravios se suman no sólo aquellos referidos al "bolsillo" y la economía (como lo serían una Renta básica ciudadana o la Matrícula Cero para las Universidades públicas, por nombrar sólo algunas), sino también las que exigen la construcción de la democracia en sus distintas dimensiones: política, social, cultural; una convivencia social real y robusta de la mano de la materialización efectiva de derechos más allá de la formalidad escrita en la Constitución; unido a

progresivamente la unidad a partir de diferentes voces y vocerías, pero -al final- unificada en torno a exigencias concretas, pero políticamente de fondo: paz, pan y democracia

ello, la exigencia del cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Este último punto es ciertamente importante. El Acuerdo "sintetiza" y condensa los grandes temas nacionales y las principales problemáticas territoriales del país. Ante el incumplimiento sistemático por parte del actual gobierno (recordar que la presidencia de Iván Duque llega bajo la pretensión de "hacer trizas los Acuerdos"), el clamor visto en la gran mayoría de las protestas desde las ciudadanías subalternas y los sectores populares sigue siendo la exigencia del cumplimiento al compromiso de una palabra empeñada que, entre otras cosas, se mantiene como una responsabilidad gubernamental, pero sobre todo como una obligación estatal constitucional.

Hasta el momento, e interpretando la coyuntura más allá de lo coyuntural y de las formas y contornos en proceso, la dinámica de la movilización ha mostrado extralimitar las expectativas y desbordar los esquemas organizativos partidarios, sindicales, incluso, los mismos Comités del Paro que, en principio actuaban como su vanguardia. Por ello, se podría sugerir que la síntesis que aparece como determinación de este acontecimiento sería la consolidación de un movimiento popular (no sólo "social") que tiene como principal referente la paz. Se trataría de una articulación que va procesando paulatina, pero progresivamente la unidad a partir de diferentes voces y vocerías, pero -al final- unificada en torno a exigencias concretas, pero políticamente de fondo: paz, pan y democracia. Estos ejes parecen ser las reivindicaciones que quedan después de las luchas que aún faltan.

* Colombia, GT *Crisis y Economía Mundial*, docente en la Escuela Superior de Administración Pública.



CHILE: ELECCIONES Y UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

PAULA VIDAL MOLINA *

El 18 de octubre de 2019 es un hito histórico que nadie lo esperaba, las calles se llenaron de colores y pancartas con diversidad de demandas que en términos generales daban cuenta de una necesidad profunda del pueblo por realizar los principios de justicia, igualdad social y dignidad, lo cual exigía el cambio de la constitución de Pinochet. Producto de esa presión popular y de trabajadoras/es en las calles (no podemos dejar de mencionar que las consecuencias de la movilización social dejaron torturados, muertos, mutilados y presos políticos que hoy siguen sin reparación ni justicia), el plebiscito y la última elección del 15 y 16 de mayo de 2021, muestran que la derecha ha sufrido un gran golpe, del cual es incierto que pueda volver a recuperarse en el corto plazo.

El 18 de octubre de 2019 nadie imaginó que marcaría un antes y un después en la historia político-social chilena

Elecciones y necesidad de cambiar el orden neoliberal en Chile

El 18 de octubre de 2019 nadie imaginó que marcaría un antes y un después en la historia político-social chilena, millones de personas en las calles clamaron por dignidad y justicia social, clamor que fue conducido por la casta política y

de espaldas al pueblo -después de la firma del 25 de noviembre de 2019- por la vía electoral para aprobar o no el cambio de la constitución (mediante plebiscito del 25 octubre de 2020) y posteriormente, la elección de convencionales que redactarán la nueva constitución, a la que se sumó la elección de gobernadores, alcaldes y concejales (15 y 16 de mayo de 2021).

El consenso de las clases dominantes respecto del acuerdo fue un mecanismo de control porque: 1) anuló la alternativa de cambiar la constitución a través del mecanismo de la asamblea constituyente, como expresión de la soberanía y autodeterminación del pueblo; 2) fijó el marco para la aprobación de sus mociones con un quorum supramayoritario de 2/3 de sus integrantes y 3) incorporó la cláusula de que hay materias que no deberán ser tocadas como los tratados internacionales (30 firmados por Chile).

Las votaciones fueron postergadas debido a las erráticas y fracasadas medidas impulsadas por el Gobierno de Sebastián Piñera para controlar las consecuencias económico-sociales y de salud de la población en pandemia, por lo que se generó una incertidumbre acerca de los resultados y la legitimidad de las votaciones, una vez realizadas las elecciones. Sin embargo, los resultados del plebiscito fueron claros: terminar con la Constitución de Pinochet. No solo el histórico nivel de participación de la población bajo el sistema de votación voluntaria, 50.7% (7.569.082); el padrón electoral nacional es de 14.900.190, sino también por la mayoritaria aprobación que tuvo -78,28%- cambiar la Constitución de Pinochet, lo demuestran.

Las elecciones del 15 y 16 de mayo -donde

además de convencionales, se eligieron gobernadores, alcaldes y concejales- mostraron tres grandes fenómenos: a) una baja en el nivel de participación respecto del plebiscito (tendencia que se observa desde 2012); b) un desplome de los sectores de la derecha y el centro político, y c) una votación que se corre hacia la izquierda con victorias de municipios emblemáticos de la derecha junto a una entrada a la convención constitucional de representantes que no militan en los partidos tradicionales de la izquierda, pero que surgen de la revuelta o rebelión del 18 de octubre de 2019.

Respecto de la baja en el nivel de participación al compararse con los datos del plebiscito, los datos muestran que solo votó el 43,41%, (<https://www.servelecciones.cl/>) del electorado, es decir, 6.468.750 de personas y un equivalente al 38,3% de los votos válidamente (5.711.254), para elegir los convencionales. Por lo tanto, la abstención alcanzó casi un 57% y la baja respecto de la elección del plebiscito fue en más de un 10% para los convencionales. Las razones que pueden explicar dicho nivel de abstención, no se han estudiado, algunos secto-

Los resultados del plebiscito fueron claros: terminar con la Constitución de Pinochet

res de izquierda señalan que se debe a que se fue gestando una decepción del proceso en los sectores populares que no se sienten llamados por las formas tradicionales de representación (ejemplo de ello es el análisis de Rafael Agacino en <https://www.youtube.com/watch?v=i7ZRffh-GERM>); una hipótesis importante de tener en consideración para los análisis futuros acerca de la movilización social.

Por otro lado, las elecciones de los convencionales dieron cuenta que la derecha es la más golpeada porque no alcanzó a manejar el tercio que esperaba, ya que, del total de los 155 elegidos, la lista Vamos por Chile (de la derecha) obtuvo 37 cupos. Un segundo golpe lo recibió la lista del Apruebo (alianza de la centro-izquierda de la ex concertación), donde la Democracia

Cristiana obtuvo solo 2 cupos y el Partido Por la Democracia (PPD) 3 cupos. A diferencia de 77 cupos que provienen del pacto —del Frente Amplio y el Partido Comunista (con 28), de la Lista del Pueblo (27 cupos, principalmente activistas y dirigentes sociales), de listas locales (con 7) y de pueblos originarios (con 15).

Otra consecuencia de las elecciones, son las votaciones que recibieron alcaldes y concejales. Si bien, en términos absolutos, la derecha a nivel nacional se mantuvo como primera fuerza en las elecciones de alcaldes, fue el gran perdedor en términos relativos porque la UDI tuvo una baja de 21 municipios y Renovación Nacional de 15 menos alcaldías que las obtenidas el 2016 (Emol.com, <https://www.emol.com>, 2021/05/17). El gran golpe que tuvieron fue haber perdido la Municipalidad de Santiago, la más importante del país, a manos de una joven economista, feminista y militante del Partido Comunista. En este sentido, sectores de la izquierda como el Partido Comunista y el Frente Amplio mostraron una tendencia al aumento en alcaldías y concejales a nivel nacional, aunque los grandes ganadores fueron los candidatos independientes, lo cual da cuenta de la crisis de los partidos políticos como ámbitos de representación de la ciudadanía.

vo-jurídico que sostiene el neoliberalismo chileno. Reconocer estas condiciones favorables en la correlación de fuerzas a favor de las demandas y necesidades del pueblo y la clase trabajadora es fundamental, pero sería un error creer que estos cambios están garantizados —como señala Goicovic (2021)— solo por contar con una mayor cantidad de convencionales. No se debe desconocer que la derecha política y económica ligada a la antigua oligarquía y a la alta burguesía vinculada al sistema financiero y la gran industria nacional e internacional, no está dispuesta a perder sus privilegios, por ello no debe extrañarnos que, en este contexto de lucha de clases, intente permanentemente impulsar procesos de restauración. Sin embargo, no les será fácil porque las elecciones presidenciales de noviembre próximo van a ser disputadas por la izquierda antineoliberal que elegirá su candidato único en las elecciones primarias de julio, entre el Partido Comunista con Daniel Jadue y el Frente Amplio con Gabriel Boric.

En síntesis, el desafío es enorme para la elaboración de una nueva constitución con un claro sello popular, plurinacional, antipatriarcal, democrática y de protección de la naturaleza, por ello, la presión desde la calle y la movilización social organizada deberá extenderse desde

estructural del capitalismo, pero sobre todo imaginar y construir las salidas que necesitamos con urgencia como sociedad.

* Chile, GT *Crisis y Economía Mundial*, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.



Las elecciones del 15 y 16 de mayo [...] mostraron tres grandes fenómenos: a) una baja en el nivel de participación respecto del plebiscito [...]; b) un desplome de los sectores de la derecha y el centro político, y c) una votación que se corre hacia la izquierda con victorias de municipios emblemáticos de la derecha junto a una entrada a la convención constitucional de representantes que no militan en los partidos tradicionales de la izquierda

Se abrirán las grandes Alamedas...

Aún con los problemas de abstención, los resultados de las elecciones, especialmente las vinculadas a los convencionales, abren un escenario impensado y favorable para las demandas del pueblo respecto de cambiar el marco normati-

la elaboración hasta la ratificación de la nueva constitución, para evitar que este proceso constitucional avance hacia un modelo neoliberal legitimado por una nueva constitución construida por un acuerdo nacional.

Sabemos que la lucha por concretar la dignidad, la justicia social y la igualdad exige ir más allá del capitalismo y su lógica y ese proceso implica una permanente discusión sobre la crisis

NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES, LOS MÁS VULNERABLES

PATRICIA POZOS RIVERA*

Las niñas y los niños son, dentro de la población migrante internacional, los más vulnerables. Están expuestos a un sin número de situaciones que ponen en riesgo su integridad física e incluso su vida. Los casos más graves corresponden a los no acompañados. Sufren el miedo de no contar con la protección de sus padres, el hambre y la deshidratación, la trata de personas, el tráfico de órganos, la explotación laboral, accidentes, las inclemencias del clima, perderse en el camino, etcétera.

Caribe con 19%, Asia 15% y las demás regiones tienen una menor proporción, siendo Europa la que tiene el menor número de niños migrantes con 7%. Actualmente con el conflicto en Oriente Medio, se ha visto que ha aumentado la llegada de niños migrantes no acompañados a Europa que van huyendo de la guerra.

Para el caso de la migración hacia Estados Unidos, los países de origen de los menores no acompañados que ha detenido la patrulla fronteriza son, principalmente, Guatemala, El

norteamericano.

No podemos dejar de lado el resultado de los ajustes estructurales en las economías latinoamericanas, debido a la aplicación de las políticas neoliberales, y mucho menos las propias características de la política migratoria que desde hace ya varias décadas ha instrumentado la Unión Americana, que busca el control de los trabajadores inmigrantes.

Por ello iniciaré con una revisión histórica de las características de la política migratoria estadounidense, posteriormente revisaremos la coyuntura en el contexto de la presidencia de Biden y finalizaré con la reflexión de los aspectos que reclaman atención inmediata.

Política Migratoria en Estados Unidos

Aviva Chomsky, en su libro *Indocumentados, cómo la inmigración se volvió ilegal*, menciona que el Estado Nación, la soberanía y la ciudadanía son construcciones sociales, inventadas por los seres humanos para servir a sus propios intereses. La condición de ilegalidad de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos es algo que ellos han fomentado y que ahora la han masificado.

La última posibilidad que hubo en Estados Unidos para la regularización de indocumentados, con la ley IRCA en 1986, estableció quiénes cumplieron el perfil para obtener la ciudadanía y también estableció quiénes no lo cumplían.

La ilegalidad tiene implicaciones económicas; por ejemplo, generar un ejército de trabajadores sin ningún tipo de derechos, con bajos salarios y totalmente sumisos. De ahí que sea muy importante la lucha de los movimientos sociales por la defensa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores inmigrantes en dicho país, que buscan concientizar a la población estadounidense de que son trabajadores indocumentados, no son criminales.

Por otro lado, es una política con raíces xenófobas y racistas. Alfonso González Toribio, en su libro, *Reforma sin Justicia*, menciona que el Estado Norteamericano, es la condensación institucional e ideológica de las relaciones sociales construidas sobre un sistema capitalista y de supremacía blanca que emergió en el siglo

De acuerdo con datos de la UNICEF (migrationdataportal.org), los niños migrantes representaron el 12% del total de la población migrante en el año 2019. La región que concentra el mayor porcentaje de niños migrantes es África con 25%, le sigue América Latina y el Caribe con 19%, Asia 15%

Las niñas y los niños migrantes no acompañados, NMNA, desde el punto de vista estadístico, incluye a la población menor de 18 años. La prensa ha reportado casos, muy preocupantes e indignantes, de niños de 6 años de edad que llegan solos a la frontera sur de Estados Unidos. Es un grupo poblacional diverso porque incluye a los que se encuentran en la niñez y a los que ya están en la etapa de la adolescencia, por ello su atención requiere de estrategias diversificadas.

De acuerdo con datos de la UNICEF (migrationdataportal.org), los niños migrantes representaron el 12% del total de la población migrante en el año 2019. La región que concentra el mayor porcentaje de niños migrantes es África con 25%, le sigue América Latina y el

Salvador, Honduras y México. Las causas de su movilidad son diversas, entre ellas están escapar de la violencia, familiar, de género y de grupos pertenecientes al crimen organizado, entre otras.

Otro de los factores determinantes de esta migración, es la reunificación familiar. Debemos recordar que muchos de los padres de los menores no acompañados, llegaron a Estados Unidos hace algunos años, en busca de trabajo; en su caso estamos hablando de una migración laboral y por el robustecimiento de la vigilancia en la frontera sur de Estados Unidos, dicha migración laboral se ha convertido en una migración permanente. Es por ello que algunos padres buscan ingresar a sus hijos al territorio

XVII y evolucionó hacia el moderno Estado de seguridad nacional.

La vinculación entre migración y seguridad fronteriza se da a partir de los años ochenta y ha dado pie a un negocio muy rentable para las empresas privadas involucradas en la seguridad de la frontera, así como con la detención de los inmigrantes indocumentados, entre ellos los Niños y las niñas migrantes no acompañados.

Independientemente si el gobierno es demócrata o republicano, la Política Migratoria estadounidense velará por los intereses nacionales, a costa de no respetar los derechos humanos de los migrantes internacionales.

familias que eran detenidas tratando de cruzar al territorio norteamericano de manera irregular, esto es realmente muy positivo. Entre los principales cambios observamos: la cancelación de la construcción del muro sobre su frontera sur, ya no se regresa a los NMNA, sino que se abrió paso a tratar de reunirlos con sus familiares y además ya no se separan a las familias. No obstante, sigue siendo una política migratoria que liga la seguridad nacional con la migración, esto tiene como resultado la criminalización de los que cruzan la frontera sin documentos, sigue regresando a territorio mexicano a las familias completas que detiene la patrulla fronteriza y

La vinculación entre migración y seguridad fronteriza se da a partir de los años ochenta y ha dado pie a un negocio muy rentable para las empresas privadas involucradas en la seguridad de la frontera, así como con la detención de los inmigrantes indocumentados, entre ellos los Niños y las niñas migrantes no acompañados.

La crisis humanitaria en la era Biden

En los primeros meses de la presidencia de Joe Biden se está repitiendo la crisis humanitaria que se desarrolló al final del periodo presidencial del expresidente Barak Obama. Cientos de NMNA, han llegado a la frontera sur de EU.

De acuerdo con lo que se ha publicado en la prensa, la BBC señaló que, en febrero de este año, las autoridades fronterizas tomaron en custodia a más de 9 000 menores de edad en la frontera, lo que representó un aumento de 60% con respecto a enero, mes en el que detuvieron a un poco más de 5 000 menores.

Dichas cifras superan a las registradas en los mismos meses en el año 2019, pero todavía no se rebasan las cifras de abril de ese año, cuando, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, se detuvieron a 6 842 niñas y niños.

El discurso del actual presidente Biden en la campaña fue pro migrante. Prometió echar para atrás la estrategia trumpista del manejo de la inmigración, en especial la Política de Tolerancia Cero, bajo la cual se separaba a las

que son solicitantes de asilo.

Los retos a resolver

En diversos medios de comunicación se han documentado entrevistas de los menores que se encuentran en los centros de detención de Estados Unidos; sus relatos nos muestran que sus derechos humanos más básicos han sido vulnerados, señalan que han sufrido frío, hambre, hacinamiento, esto último muy grave en el contexto de la COVID – 19.

No hay duda de que lo urgente es resolver los detonantes de la migración, para Biden son los problemas de pobreza de los países de origen, pero no reconoce que Estados Unidos es un país que atrae migrantes porque tiene un mercado laboral que los contrata.

Lo fundamental es una vía que permita la regularización de los inmigrantes en dicho país, sin embargo, esto significaría un incremento del costo de la fuerza de trabajo, que atenta contra la acumulación de capital de las empresas norteamericanas.

Mientras no se atiendan las verdaderas cau-

Lo fundamental es una vía que permita la regularización de los inmigrantes en dicho país, sin embargo, esto significaría un incremento del costo de la fuerza de trabajo, que atenta contra la acumulación de capital de las empresas norteamericanas.

sas de fondo de la migración, los inmigrantes seguirán sufriendo la vulneración de sus derechos humanos, principalmente los más débiles, las niñas y los niños migrantes.

* México, GT *Crisis y economía mundial*, Profesora de la Facultad de Economía de la UNAM.



MANIFIESTO LIBERACIÓN DE PATENTES VACUNAS COVID 19*

Los criterios de salud pública y el derecho a la salud de las personas ha de estar por encima del negocio. Defendemos la inmunización de todas las personas para prevenir la aparición y extensión de nuevas variantes. Que las negociaciones estén sometidas a transparencia y que los acuerdos establecidos y sus condiciones se hagan públicos.

Los criterios de salud pública y el derecho a la salud de las personas ha de estar por encima del negocio.

Hemos visto que en todo el mundo, en nuestros territorios, ciudades, barrios y pueblos han enfermado y muerto millones de seres humanos, gente cercana, amigos, familiares y sobre todo ancianos y personas vulnerables. La pandemia ha traído restricciones de derechos y libertades y un aumento de las desigualdades y especialmente las relacionadas con la salud. Esta pandemia que fue declarada hace más de un año ha causado ya 3 millones de muertes según la OMS.

Después de una gesta científica sin precedentes y con una aportación ingente de fondos públicos se dispone de vacunas de alta eficacia que supone una esperanza de acabar con la catástrofe humanitaria provocada por el virus. Sin embargo, la vacunación discurre ralentizada por un régimen de producción y llegada de vacunas que es insuficiente. La vacunación se altera por alarmas de efectos secundarios graves que solo

suponen un 0,00009% frente al 16% del riesgo de tener consecuencias graves por no tener vacunas.

La producción, distribución y administración de vacunas está atada a la competición entre laboratorios y países. Las patentes, el secretismo de los contratos y la falta de transparencia son sus causas. La inversión pública global en la vacuna de la Covid-19 supera los 25.000 millones de euros, incluyendo el desarrollo, la implantación y la distribución. Esta inversión pública contrasta con el hecho de que la gestión posterior de las patentes está suponiendo unos grandes beneficios para el sector privado.

Los principales laboratorios han repartido entre sus socios capitalistas 21,610 millones con un valor para vacunar a 1300 millones de personas. Pfizer y Moderna se están alzando como las vencedoras de una guerra entre laboratorios con unos precios que rondan entre los 11,22 y 61,50€ por la inmunización completa y quieren seguir aumentando dosis y precios. Todo ello frente a 2,5€ de Astrazeneca y 8,4€ de Janssen por sus inmunizaciones.

La desigualdad mundial en el reparto con la consiguiente escandalosa pugna entre países ha hecho posible que de la desgracia salga una nueva ola de enriquecimientos millonarios de los gestores de los laboratorios: en los países ricos la vacuna llega a 1 de cada 4 y en los pobres, en el mejor de los casos, a 1 cada 500 puesto que a algunos no ha llegado la vacuna. Esto alimenta que el virus siga sin control infectando y provocando mutaciones que hacen ineficaces las vacunas actuales y que los países dependan del ansia de laboratorios con patentes protegidas.

Las principales farmacéuticas se oponen a compartir la tecnología y la suspensión de patentes. Ante esto tienen que reaccionar los gobiernos y las leyes internacionales para garantizar que las vacunas lleguen a todas las personas y a todos los rincones de la geografía mundial independientemente de lo nutridas que tengan sus economías los distintos países.

Por ello exigimos:

A las autoridades estatales y europeas, que activen los mecanismos excepcionales que tiene la legislación internacional, por lo que las industrias farmacéuticas que disponen de vacunas de probada eficacia liberen las patentes, y permitan compartir conocimiento y producción, para acelerar la inmunización de todas las personas y para prevenir la aparición y extensión de nuevas variantes. Los criterios de salud pública y el derecho a la salud de las personas ha de estar por encima del negocio.

La inversión pública global en la vacuna de la Covid-19 supera los 25.000 millones de euros, incluyendo el desarrollo, la implantación y la distribución.

Que las negociaciones estén sometidas a transparencia y que los acuerdos establecidos y sus condiciones se hagan públicos.

Que se invierta en el sistema sanitario público, ya que cualquier causa que retrase la vacunación y la lucha por garantizar el derecho a la salud de toda la población, impide cualquier recuperación y enriquece a unos pocos millonarios.

Porque ante una pandemia, hasta que no esté la última persona protegida, no lo está el resto. La vacuna de la COVID-19 no debe ni puede entenderse de patentes y de beneficios de las farmacéuticas. Se debe anteponer la salud y la vida de las personas.

* Manifiesto internacional del 6 de mayo 2021, firmado por 200 organizaciones sociales y sindicales.



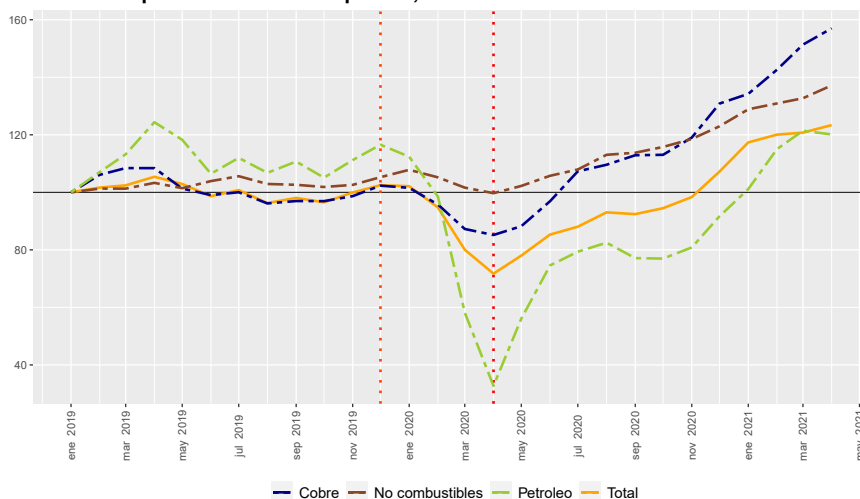
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS

ARMANDO NEGRETE*

En la última revisión de la OECD, mayo de 2021, el organismo reestimó el crecimiento económico global para el año en curso en 5.8% y la dinámica comercial en 8.2%. Para finales de este año, casi la mitad de las economías del G20, muchas avanzadas y algunas emergentes, entre ellos Chile, alcanzarán sus niveles pre-pandémicos. Tras la paulatina reapertura de actividades comerciales y productivas, se han comenzado a recuperar los niveles de demanda y producción internacionales, los cuales presionaron el nivel de precios de las materias primas.

Si se considera enero de 2019 como base, casi la totalidad de las materias primas ha superado el nivel de precios pre-pandémico. En particular, el cobre y el petróleo han presentado una recuperación significativa. Este incremento de precios ha favorecido a los países exportadores y ha mejorado sus perspectivas de crecimiento. Tal es el caso de Chile y Colombia. No obstante, la recuperación económica se presenta de formas desiguales y a ritmos distintos, no sólo por su especialización comercial, sino por factores del mercado interno y la falta de equidad en la distribución internacional de las vacunas.

Índices de precios de materias primas, Enero 2019 = 100



Fuente: Elaboración propia con datos del Primary Commodity Price System del IMF en www.data.imf.org

* México, Académico del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

COMITÉ
EDI-
TO-
RIAL:

**Gabriela Roffinelli,
Josefina Morales y Julio
Gambina**

Las notas son
responsabilidad de
los autores.

Diseño Editorial:
Verena Rodríguez

nuestraamericaxxi.com

Nuestra América XXI : desafíos y alternativas #56 / Josefina Morales... [et al.] ; editor literario Gabriela Roffinelli ; Josefina Morales ; Julio César Gambina. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2021.

Libro digital, PDF
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-722-917-2

1. Pandemias. 2. Vacunación. 3. Elecciones. I. Morales, Josefina, ed. Lit. II. Roffinelli, Gabriela, ed. Lit. III. Gambina, Julio César, ed. Lit.

CDD 306.0980